

Frente a frente



Michel De L'Herbe
Consultor en Emergency Management

Advertencias ignoradas, consecuencias repetidas

La tragedia de los incendios se repite cada verano, y nos expone una y otra vez a una realidad incómoda: en Chile, las emergencias no fallan por falta de diagnóstico, sino por debilidades persistentes en la gestión y en la institucionalidad.

Solo el primer mes de 2026, los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble ya están entre los más mortales de nuestra historia, con 21 fallecidos, más de 20.000 damnificados. En promedio, nuestro país enfrenta, al menos, una emergencia de magnitud al año, pero aún no hemos sido capaces de consolidar un sistema que permita gestionarlas para recuperar a las comunidades afectadas.

Tenemos un sistema de emergencias fragmentado, reactivo y con responsabilidades difusas. Cambian los gobiernos, cambian los nombres de las instituciones y las autoridades, pero las deficiencias críticas se mantienen. Por ejemplo, la gestión de evacuaciones se reduce, en la práctica, a un mensaje de celular. Es una herramienta útil, pero no constituye un sistema: depende de la conectividad y no integra adecuadamente otros medios, como la televisión abierta, la radio, los sistemas de altoparlantes comunitarios, las sirenas, una coordinación efectiva con autoridades locales y servicios de primera respuesta. Tampoco una operación de evacuación claramente diseñada e implementada. Incluso ante emergencias dinámicas como los incendios forestales.

En 2010, tras el terremoto y tsunami, la gran falla del sistema de emergencias fue precisamente no alertar a tiempo, no entregar información clara y tampoco ejecutar evacuaciones oportunas. Lo mismo ha ocurrido en tres de las cuatro últimas temporadas.

Tras los incendios de 2023 en estas mismas regiones y el incendio de Viña del Mar de 2024, dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados y Diputados advirtieron las debilidades de las alertas para evacuaciones, así como la urgencia y responsabilidad de intervenir el sistema. A la fecha no hay cambios. Tampoco rendición de cuentas.

Ya no hay tiempo para debates teóricos ni rediseños institucionales de largo plazo. Hay víctimas que requieren una respuesta humanitaria digna, efectiva y oportuna, algo no logrado en los primeros días de esta emergencia. Aquí surge un dilema clave en el actual momento: ¿seguiremos enfrentando estas catástrofes desde la lógica tradicional centrada en la construcción de viviendas, o avanzaremos hacia una mirada contemporánea de la gestión de emergencias enfocada en la recuperación de comunidades?

Esto no se trata solo de reconstruir viviendas. Se trata de recuperar comunidades, lo que implica abordar la infraestructura, pero, por sobre todo, comprender que el enfoque debe ser integral: recuperar el bienestar emocional, social, físico y económico de las personas y de los territorios afectados. Eso supone, por ejemplo, asegurar apoyo psicosocial oportuno, restablecer servicios básicos y de salud, proteger medios de vida, reactivar economías locales y acompañar a las comunidades en procesos de retorno seguros y dignos. Sin olvidar que entre hoy y el día en que se reconstruyan las viviendas existe un proceso que debe ser abordado con refugio, acogida, protección y bienestar. Esa mirada exige que la autoridad se haga cargo de las falencias de una institucionalidad que ha demostrado demasiadas veces que no da el ancho para desafíos como el actual.

Tenemos la oportunidad de hacer un cambio positivo que impactará directamente en las personas y su entorno. Aprendamos de las experiencias y estándares de países desarrollados y apliquemoslas en Chile. Las emergencias seguirán siendo parte de nuestra normalidad.



Sergio Contreras Q.
Director del Dpto. de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción

Por qué seguimos llegando tarde

Cada verano, Chile vuelve a enfrentar incendios forestales, cada vez más extensos, intensos y socialmente dañinos. Durante años hemos venido explicando junto a mi colega Dr. Gustavo Saiz, investigador asociado de la Facultad de Ciencias de la UCSC, que no se trata solo de condiciones climáticas adversas. Aumento de temperaturas, sequías prolongadas y vientos intensos crean el escenario, pero son los factores estructurales los que permiten que el fuego se transforme en catástrofe: una presión humana creciente que multiplica los focos de ignición y paisajes rurales dominados por grandes extensiones de combustible homogéneo. En esas condiciones, basta una chispa para que un incendio forestal escale rápidamente, poniendo en riesgo a poblaciones completas.

Los incendios que enfrentamos hoy no son idénticos a los de hace una década. Es la misma amenaza, pero ampliada por cambios territoriales y productivos. El avance de monocultivos forestales continuos, que cubren cerca de un tercio de las regiones del Biobío y Ñuble, la expansión de viviendas en zonas de interfaz urbano-rural y la replantación reiterada de áreas previamente quemadas con las mismas especies, han configurado paisajes altamente inflamables. A esto se suma el abandono de terrenos con vegetación invasora y combustible fino. Cuando múltiples focos se activan en simultáneo, los recursos de combate se vuelven insuficientes, por más tecnología aérea o terrestre que se disponga.

Uno de los impactos menos visibles, pero más persistentes, ocurre bajo nuestros pies. Los suelos afectados por megaincendios pierden nutrientes, estructura y estabilidad, expuestos a procesos severos de erosión. Tras el verano llegan las lluvias, y con ellas la escorrentía superficial que arrastra capas completas de suelo fértil, produciendo aluviones.

Chile ha avanzado en políticas de respuesta y extinción, y existen valiosas guías de autoprotección elaboradas por organismos como Conaf y el Centro Nacional de Conservación y Restauración. Sin embargo, estas herramientas siguen siendo poco conocidas y escasamente incorporadas en la vida cotidiana de las comunidades expuestas. La política pública continúa centrada, en gran medida, en apagar incendios, cuando la evidencia muestra que el mayor margen de acción está en la prevención. No podemos controlar el clima ni eliminar por completo las igniciones, pero sí reducir el riesgo gestionando la cantidad y distribución del combustible en los paisajes rurales.

Chile ha avanzado en políticas de respuesta y extinción, y existen valiosas guías de autoprotección elaboradas por organismos como Conaf y el Centro Nacional de Conservación y Restauración. Sin embargo, estas herramientas siguen siendo poco conocidas y escasamente incorporadas en la vida cotidiana de las comunidades expuestas. La política pública continúa centrada, en gran medida, en apagar incendios, cuando la evidencia muestra que el mayor margen de acción está en la prevención. No podemos controlar el clima ni eliminar por completo las igniciones, pero sí reducir el riesgo gestionando la cantidad y distribución del combustible en los paisajes rurales.

Asumiendo que los incendios seguirán ocurriendo, la pregunta es qué priorizar. Proteger vidas humanas exige una población informada, preparada y consciente. Pero también requiere repensar el territorio.

Desde hace años proponemos avanzar hacia paisajes rurales tipo mosaico, con usos de suelo diversos, discontinuidades de vegetación y barreras naturales que dificulten la propagación del fuego. Esta estrategia, aplicada con éxito en otros contextos de clima mediterráneo (Portugal y España), debe ir acompañada de educación en prevención y de una revisión profunda de las políticas de ordenamiento territorial y manejo forestal.

Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos solo garantiza que el próximo verano volveremos a lamentar pérdidas evitables. Educar, planificar y prevenir no es opción: es la única vía responsable frente a una amenaza instalada.

¿Qué se debe hacer para enfrentar de mejor manera los riesgos de incendios forestales?

En los últimos años el país ha enfrentado significativos incendios forestales donde en la última década se han multiplicado la cantidad de hectáreas quemadas. Hoy debemos nuevamente lamentar hechos de esta naturaleza como lo ocurrido en las regiones de Biobío y Ñuble -con 21 fallecidos-, que llevan a los especialistas en sus análisis a abordar la situación y qué se debe hacer para hacer frente a esta amenaza.

